

Hacia una democracia incluyente: acciones afirmativas, pendientes legislativos y representación sustantiva de grupos en situación de vulnerabilidad

Lorena Vázquez Correa

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

lorena.vazquez@senado.gob.mx

Resumen

El objetivo de la ponencia es analizar los avances y desafíos que persisten para la construcción de la democracia incluyente en México, con especial énfasis en las acciones afirmativas para la inclusión de pueblos y comunidades indígenas. Para ello, se presentan las acciones afirmativas implementadas por el INE en 2021, la discusión y pendientes legislativos para su regulación, así como la representación sustantiva de dichos grupos, medida a partir de los decretos aprobados entre septiembre de 2018 y septiembre de 2023 (los primeros dos años de la legislatura).

Palabras clave: acciones afirmativas; representación sustantiva; grupos en situación de vulnerabilidad; indígenas; afromexicanas; migrantes; personas con discapacidad; diversidad sexual.

Introducción

La Legislatura LXV del Congreso de la Unión (2021-2024) es la más incluyente en la historia de México, al contar con 65 diputaciones de diversos sectores de la población como las personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, con discapacidad y migrantes (Vázquez 2022:1). La inclusión en espacios de toma de decisión de grupos sociales históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad no habría sido posible sin la aprobación de una serie de 50 acciones afirmativas impulsadas desde el Instituto Nacional Electoral y ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El resultado fue positivo, ya que 13 por ciento de la Cámara de Diputados se conformó por personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. Posteriormente, las y los legisladores discutieron -sin éxito- la manera de incluir las medidas en las leyes que regulan el registro de candidaturas a cargos legislativos. Al inicio del proceso electoral 2023-2024 y frente a la ausencia de legislación en la materia, el INE nuevamente aprobó acciones afirmativas, aunque

en con un modelo distinto al de 2021. Además, son reiterados los cuestionamientos sobre qué hicieron en el ejercicio de su cargo las y los diputados electos por acciones afirmativas.

El objetivo de la ponencia es analizar los avances y desafíos que persisten para la construcción de la democracia incluyente en México. Se argumenta que la atención a grupos en situación de vulnerabilidad fue uno de los asuntos más legislados en el periodo de septiembre de 2021 a mayo de 2023 (los primeros dos años de la legislatura). Para ello, el texto se estructura en tres partes: 1) las acciones afirmativas implementadas por el INE en 2021 y para las elecciones de 2024; 2) la discusión y pendientes legislativos para su regulación y, 3) la representación sustantiva de dichos grupos, medida a partir de los decretos aprobados entre septiembre de 2018 y septiembre de 2023.

I. Acciones afirmativas en el proceso electoral 2021

La primera vez que el INE implementó acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad para el registro de candidaturas para la Cámara de diputados federal fue en el proceso electoral federal 2017-2018, al obligar a los partidos a postular, paritariamente, fórmulas integradas por personas indígenas en 12 de los 28 distritos electorales federales indígenas (Vázquez 2020: 9), como una estrategia institucional para revertir la tendencia en la subrepresentación de la población con identidad étnica. El TEPJF amplió la medida a 13 candidaturas.

En 2021 en INE nuevamente aplicó acciones afirmativas, pero no solo para la población indígena, sino también para personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes o residentes en el extranjero. En modelo fue tan exitoso que, de las 50 acciones afirmativas para el registro de candidaturas que fueron implementadas, ganaron 65 personas.

Candidaturas electas por acción afirmativa, proceso electoral 2021

Acción afirmativa	Total			Mayoría Relativa			Representación Proporcional		
	Total	M	H	Total	M	H	Total	M	H
Personas indígenas	36	22	14	21	13	8	15	9	6
Personas con discapacidad	8	5	3	4	1	3	4	4	0

Personas afroamericanas	6	4	2	4	3	1	2	1	1
Diversidad Sexual	4	4	0	1	1	0	3	3	0
Migrante o residente en el extranjero	11	6	5	0	0	0	11	6	5
Total en resultados electorales	65	41	24	30	18	12	35	23	13

Fuente: elaboración propia con datos del INE (2021).

En 2021, en el nivel local 28 entidades federativas implementaron acciones afirmativas para el registro de candidaturas de personas indígenas para la renovación de los congresos locales y 21 entidades las aplicaron también para personas jóvenes y de la diversidad, respectivamente (INE: 2021) (Tabla 2). Morelos, Oaxaca y Yucatán contemplaron la inclusión de personas adultas mayores; mientras que Ciudad de México, Durango, Guerrero, Nayarit y Zacatecas son las únicas entidades federativas que también contemplan las diputaciones migrantes o residentes en el extranjero (Tabla 2).

Tabla 2. Acciones afirmativas por entidad federativa y Cámara de Diputados (2021)

	Personas indígenas	Personas afroamericanas	Personas con discapacidad	Personas de la Diversidad sexual	Personas migrantes o residentes en el extranjero	Personas Jóvenes	Personas adultas mayores
No. De entidades con acción afirmativa	28	7	16	21	5	21	3
Cámara de diputados federal	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (2021).

La heterogeneidad de criterios para la aplicación de las acciones afirmativas, así como el reconocimiento de la necesidad de establecer dichos mecanismos en la legislación electoral han motivado la discusión sobre cómo regularlos. En el siguiente apartado se analizan las diversas

propuestas legislativas en la materia, incluido el Plan B de reforma electoral invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. Discusión legislativa sobre acciones afirmativas

a) Iniciativas legislativas

Durante la LXV Legislatura se han presentado al menos 15 iniciativas para legislar en materia de acciones afirmativas para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes o residentes en el extranjero, de la diversidad sexual, jóvenes o adultas mayores, para la postulación de candidaturas a la Cámara de diputados federal, algunas garantistas y otras limitativas de las acciones afirmativas. A grandes rasgos las iniciativas plantean lo siguiente:

La diputada Irma Juan Carlos (Morena) recomienda que 43 diputaciones de representación proporcional sean para personas indígenas (el INE aplicó 9 en 2021), así como 64 de mayoría relativa (mientras que el INE aplicó 21 fórmulas). Para senadores la diputada propone seis fórmulas de personas indígenas por el principio de representación proporcional, seis de primera minoría y 13 de mayoría relativa, respetando la paridad de género. Esto es importante si consideramos que el INE no ha implementado estas medidas para candidaturas a senadurías (Vázquez 2022:6-7).

La diputada Yolanda de la Torre (PRI) propuso que el principio de inclusión para el registro de candidaturas de diputaciones y senadurías para personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual, este a cargo de la autoridad electoral y en la cantidad que esta instancia considere pertinente previo a cada proceso electoral (YTV, 2022). En el mismo tenor, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) propuso que la autoridad administrativa electoral sea el órgano encargado de determinar el número de fórmulas en las que los partidos deberán postular a personas indígenas y afromexicanas (AVV, 2022).

El senador Osorio Chong propuso que el Instituto Nacional Electoral ratifique o actualice los lineamientos sobre el número de candidaturas para la inclusión de grupos vulnerables en cada proceso electoral (MAOC, 2021: 120-121). Además, la propuesta del senador amplía las acciones afirmativas a la administración pública federal, al señalar que la Secretaría de la Función Pública deberá garantizar que 12 por ciento de las vacantes laborales existentes en dicho sector sean destinadas a la contratación de personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas y personas de la diversidad sexual (MAOC, 2021: 121) (Vázquez 2022:8).

Sin embargo, no todas las iniciativas implican una ampliación de derechos de las personas que pertenecen a algún grupo históricamente subrepresentado. Por ejemplo, el diputado Carlos Humberto Quintana Martínez (PAN) propuso que “Toda medida afirmativa o reserva de candidaturas para grupos de población en situación de vulnerabilidad que se implemente en los procesos electorales deberá estar asentada en la presente ley [Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales]” (CHQM, 2022: 16). De aprobarse, las autoridades electorales estarían impedidas para implementar acciones afirmativas a través de Acuerdos de sus consejos generales, lo que podría constituir un obstáculo que retrase o impida su aplicación y, por tanto, la inclusión de personas de grupos vulnerables en los espacios de toma de decisión.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propuso que las acciones afirmativas que emitan los institutos electorales deberán emitirse noventa días antes del inicio del proceso electoral (GP-PT, 2022:18). La iniciativa añade que, una vez iniciado el proceso electoral, el Tribunal Electoral deberá abstenerse de emitir recomendaciones a la autoridad administrativa electoral en materia de acciones afirmativas (GP-PT, 2022:101). En el mismo tenor, la iniciativa del diputado Armando Tejeda propone que los lineamientos o criterios para la postulación de candidaturas deberán ser aprobados treinta días antes del inicio del proceso electoral en el que se apliquen (ATC, 2022).

La senadora Sasil de León Villard (ES) retomó el modelo de acciones afirmativas que implementó el INE en 2021 y a partir de ello propuso reformar la ley para establecer que el Instituto deberá implementar las acciones afirmativas para candidaturas a senadurías y diputaciones federales, pero éstas no podrán ser más de 50 fórmulas por ambos principios, “con la finalidad de respetar la vida interna de los partidos políticos” (SDLV, 2022). Se considera limitativa porque pone un tope máximo para la inclusión de dichos grupos.

Una parte importante de las discusiones legislativas fue el “Plan B” de reforma electoral que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluía disposiciones sobre acciones afirmativas. El decreto de reforma electoral del 2 de marzo de 2023 reconoció en la LGIPE la obligación de los partidos políticos nacionales a incluir en la postulación de sus candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa (MR) y por el de representación proporcional (RP), al menos 25 postulaciones para: 1) Personas pertenecientes a una comunidad indígena, 2) Personas Afromexicanas, 3) Personas con discapacidad, 4) Personas de la diversidad sexual, 5) Personas residentes en el extranjero, y 6) Personas jóvenes.

El proyecto de decreto planteaba que las diputaciones de mayoría relativa por acción afirmativa podrán ser postuladas en cualquier distrito electoral federal y en el caso de las diputaciones por representación proporcional se ubicarían en dos bloques ubicados en los primeros veinte lugares, pese a que en el 2021 estaban entre los 10 primeros.

Cabe señalar que la iniciativa de reforma electoral presentada por el Presidente de la República y aprobada por la Cámara de Diputados establecía un total de 51 fórmulas para personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación, que incluían a personas jóvenes, y consideraba cuatro posiciones para el Senado. Sin embargo, en la Cámara revisora -el Senado- la cifra se redujo a 25 fórmulas para diputaciones sin definir reglas específicas para su aplicación y distribución entre los grupos y se excluyó al Senado de acciones afirmativas.

b) Los retos en relación con la aplicación de las acciones afirmativas fueron los siguientes:

La aplicación de las acciones afirmativas no estuvo exenta de obstáculos para su implementación. En este apartado se describen algunos de ellos. Por ejemplo, la impugnación de candidaturas (Tabla #).

Candidaturas impugnadas por acción afirmativa

Acción Afirmativa	MC	Morena	PAN	PRI	PT	PVEM	Total general
Afromexicana			1				1
No electa			1				1
Discapacidad		1	1	1		3	6
Electa		1		1		3	5
No electa			1				1
Indígena	1	14	5	4	1	1	26
Electa		6		3	1		10
No electa			2	1			3
Revocada	1	8	3			1	13
Migrantes		1	4	2			7
Electa			2				2
No electa				1			1
Revocada		1	2	1			4
Total general	1	16	11	7	1	4	40

Fuente: tomado de INE-COLMEX (2022).

c) El modelo del INE para las elecciones 2024

Frente a la ausencia de legislación federal sobre inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad para la postulación de cargos legislativos, el INE aprobó un Acuerdo que mantiene 30 fórmulas para personas de comunidades y pueblos indígenas a quienes llaman “naciones mexicanas”, de las cuales, 18 fórmulas deben ser por mayoría relativa y 12 de representación proporcional. Para el Senado se deben postular al menos cinco fórmulas en cualquiera de los dos principios.

Además, los partidos deberán postular 20 fórmulas para personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, en pobreza y mexicanas migrantes residentes en el extranjero. Es decir, se agregó el grupo en situación de pobreza -aunque no se aumentó el número de fórmulas respecto a las empleadas en 2021, lo que necesariamente implicará una reducción de fórmulas en alguno otro de los grupos. Cabe señalar que los partidos y coaliciones deberán postular al menos una fórmula por cada acción afirmativa en cualesquiera de los principios, lo que garantiza cierta continuidad, aunque tal vez disminuida, de la representación de todos los grupos referidos. Para las senadurías, los partidos y coaliciones deberán postular una fórmula de personas afromexicanas, una de la diversidad sexual, una con discapacidad por cualquiera de los dos principios, así como una fórmula de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero en la lista de Representación Proporcional. Si a ello se suman las 5 fórmulas para personas indígenas la cifra asciende a nueve acciones afirmativas para el registro de candidaturas al Senado de la República.

III. Representación sustantiva de grupos en situación de vulnerabilidad

Ponderar el impacto que las reformas legislativas tienen en los grupos en situación de vulnerabilidad no es tarea sencilla. Sin embargo, un primer paso en el análisis es describir cuántas y de qué trataron dichas reformas legislativas. Durante los primeros dos años de la LXV legislatura fueron aprobados 158 decretos que reforman, adicionan o derogan leyes secundarias o la Constitución, de los cuales al menos 21 tuvieron elementos que inciden en la población de grupos en situación de vulnerabilidad, los cuales se describen a continuación:

Personas con discapacidad

Inclusión laboral de personas con discapacidad. El decreto reformó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para establecer que la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social promoverá políticas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, garantizando condiciones de infraestructura accesibles, seguras y saludables (27-Oct-2022).

Trabajo digno para personas con discapacidad. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad fue reformada para incluir el trabajo digno y la equidad en las condiciones laborales para la inclusión de las personas con discapacidad (DOF, 27-10-2022).

Adopción de la perspectiva de inclusión y accesibilidad universal en el deporte. La reforma a Ley General de Cultura Física y Deporte incluyó el deporte adaptado, definido como “el que realizan las personas con discapacidad en condiciones de equidad, que es reglamentado e institucionalizado” (DOF, 20-12-2022).

Niñez y Juventud

Detección oportuna del talento de las juventudes en el deporte. La Ley General de Cultura Física y Deporte establece que el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, órgano colegiado que asesora al ejecutivo Federal en la elaboración del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, deberá promover mecanismos para la detección oportuna de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con talento deportivo en la educación básica y educación media superior (DOF, 20-Dic-2022).

Salud mental para personas adolescentes privadas de su libertad. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes fue reformada para incluir la atención psicológica en la lista de derechos de las personas sujetas a medidas cautelares o de sanción privativa de libertad (DOF, 20-12-2022).

Edad para ocupar cargos públicos. Se reformó la Constitución para reducir la edad mínima para ocupar cargos públicos. Ahora los jóvenes a partir de los 18 años podrán ejercer una diputación, antes reservada a mayores de 21 años, y la edad mínima para ocupar una secretaría de Estado se ha reducido de 30 a 25 años.

Premio Nacional de la Juventud y cultura indígena. El decreto agrega la distinción de Fortalecimiento y promoción a la cultura y las lenguas indígenas nacionales, al Premio Nacional de la Juventud que se entrega a jóvenes de entre 18 a 29 años (DOF, 29-Mar-2022).

Contra la explotación infantil/juvenil en el sector agrícola. La reforma la Ley Federal del Trabajo establece que las labores agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, que impliquen el uso de químicos, manejo de maquinaria o vehículos pesados, son peligrosas o insalubres para las personas menores de 18 años (DOF, 05-Abr-2022). La Secretaría del Trabajo y

Previsión Social deberá elaborar y publicar una Norma Oficial Mexicana para clasificar las actividades enunciadas a fin de determinar aquellas en las que puedan emplearse a las personas menores de 18 años.

Niñez y atención a trastornos mentales. La reforma a la Ley General de Salud establece que, si un menor es diagnosticado con un trastorno mental o de comportamiento que requiera internamiento, este deberá efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a la atención de menores (DOF, 22-Nov-2021).

Contra la esclavitud de menores. El decreto establece que las autoridades están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes mayores de 15 años se vean afectados por explotación laboral, por un trabajo que pueda perjudicar su salud, educación o impedir su desarrollo físico o mental, así como por el trabajo forzoso y la esclavitud (DOF, 23-Mar-2022).

Diversidad sexual

Extensión de la seguridad social a parejas del mismo sexo. El Congreso de la Unión reformó las leyes del IMSS e ISSSTE para ampliar el goce de los derechos de seguridad social a las parejas del mismo sexo y modificó varios términos para volver más incluyente el lenguaje de la legislación (DOF, 20-01-2023).

Personas adultas mayores/personas de zonas rurales

Adopción del Formato de Lectura Fácil en la impartición de justicia. La reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad incluyó el término: “Formato de Lectura Fácil” y estableció que éste deberá ser incluido en los documentos emitidos por las instituciones de administración e impartición de justicia (DOF, 06-01-2023).

Ampliación del plazo para presentar quejas ante la CNDH. La reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos amplió el plazo de tres a cinco días para ratificar la presentación de quejas ante la Comisión. De acuerdo con el dictamen de las comisiones, la medida tuvo como objetivo ampliar la protección de los derechos humanos especialmente de aquellas personas que habitan en zonas marginadas o con difícil acceso a Internet (DOF, 19-Ene-2023).

Pensiones por ascendencia. Fue derogado el numeral 2 del inciso D) de la Fracción XII del Artículo 6 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado porque

restringía el derecho del padre o de la madre a recibir la pensión por ascendencia derivada de la muerte de su hijo o hija trabajadora pensionado. El decreto atiende la resolución de la SCJN de modificar la parte correspondiente sobre las familias derechohabientes para que cuenten con acceso a los servicios, sin importar el origen o el régimen por el cual se otorga.

Transversales: lenguaje incluyente e igualdad

Garantizar e impulsar la eliminación de obstáculos para la igualdad. La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala la obligación de las autoridades y particulares de, no solo promover, sino también garantizar e impulsar la eliminación de todos los obstáculos que limiten la libertad e igualdad de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social de México (19-Ene-2023).

Armonización normativa con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. La Ley de Asistencia Social fue reformada para reemplazar las referencias a disposiciones anteriores sobre niñez y adolescencia y, de esa manera armonizar dicha ley con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (DOF, 06-01-2023).

Migrantes

Perspectiva intercultural en programas para refugiados. La reforma incorpora los principios de interculturalidad, movilidad humana, perspectiva intercultural y la interseccionalidad para la inclusión social de personas refugiadas en el territorio nacional (DOF, 18-Feb-2022). Según las comisiones dictaminadoras del Senado, con este decreto la Secretaría de Gobernación tendrá más herramientas para brindar asistencia y auxilio a las personas refugiadas para facilitar su inclusión, tomando en cuenta sus experiencias individuales y sociales que les da identidad, por ejemplo, si se trata de una madre soltera, si es pobre, indígena, transgénero, entre otras.

Tecnología automatizada para la vigilancia. La reforma a la Ley de Migración señala que el Instituto Nacional de Migración podrá utilizar herramientas tecnológicas automatizadas para vigilar la entrada y salida de personas del territorio nacional y revisar su documentación (DOF, 29-Abr-2022).

Indígenas

Actualización de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El documento actualiza la referida Ley para eliminar las menciones a la desaparecida Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (abrogada el 4-Dic-2018) y la sustituye por el Consejo

Nacional de Pueblos Indígenas. Además, establece que un representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) formará parte del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (DOF, 17-Ene-2022).

Expiden la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. La nueva ley tiene como objetivo proteger el patrimonio cultural indígena y afromexicano. Para ello, confiere a los pueblos y comunidades el reconocimiento de la propiedad colectiva de las expresiones de su patrimonio cultural, tangible e intangible, así como la posibilidad de determinar el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación por parte de terceros (DOF, 17-Ene-2022).

Amplían Junta de gobierno del INPI. La reforma incorpora a la persona titular de la secretaría de Cultura en la junta de gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (DOF, 18-May-2022). De acuerdo con las comisiones dictaminadoras, la Secretaría de Cultura tiene una indisoluble relación e influencia en los asuntos que atañen a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Conclusiones

Si bien hay avances en la aplicación de acciones afirmativas para la inclusión de grupos vulnerables en las legislaturas locales y federal, persisten retos legislativos para garantizar la aplicación de dichos mecanismos. Algunos desafíos identificados consisten en legislar para establecer que la aplicación de acciones afirmativas para grupos vulnerables debe ser obligatoria en cada proceso electoral, a fin de que no dependa de la voluntad y acuerdos de las autoridades electorales, así como de impugnaciones de partidos políticos y resoluciones de tribunales electorales en una cadena impugnativa. Además, otro desafío es ampliar la aplicación de las acciones afirmativas para las postulaciones de senadurías, no solo para la Cámara de Diputados.

En los Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral del llamado *Plan B*, algunas(os) especialistas identificaron varios desafíos en la implementación efectiva de las acciones afirmativas. Por ejemplo, fortalecer los mecanismos institucionales para combatir la simulación por parte de los partidos políticos y las candidaturas que se registran en cada acción afirmativa.

Asimismo, algunas ponentes señalaron que la identidad de las personas electas por acción afirmativa es reservada, por lo que se desconoce quiénes son las diputaciones que representan a dichos grupos. Al respecto se propuso que esta sea información pública para abrir la posibilidad de que haya representación sustantiva entre las y los representantes y los grupos a los que representa (Cámara de diputados, 2022). Cabe señalar que el INE hizo pública la lista de personas electas por acción afirmativa en un documento que publicó con El Colmex.

Finalmente se enfatizó que la legislación federal en materia de acciones afirmativas no debería suponer umbrales máximos para la inclusión, sino porcentajes o números mínimos para la inclusión de grupos sociales altamente discriminados y en situación de vulnerabilidad como las personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual y con discapacidad.

Referencias

- Garza Corona, S.; Vázquez Correa, L. (2023). Decretos aprobados por el Congreso de la Unión (18 de junio de 2022 al 14 de marzo de 2023). Mirada Legislativa No. 234. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad de México, 19p.
- Vázquez Correa, L. (2022). Iniciativas para legislar sobre acciones afirmativas para la inclusión de grupos vulnerables en el Congreso de la Unión. Mirada Legislativa No. 227. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad de México, 15p.
- Vázquez Correa, Lorena (2020), “Representación política y acciones afirmativas indígenas: la agenda pendiente”. Mirada Legislativa No. 192, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad de México, 21p.
- Vázquez Correa, L. (2022). “¿Qué temas legisla la LXV Legislatura? Decretos aprobados por el Congreso de la Unión (septiembre 2021 - junio 2022)”. Cuaderno de investigación No. 90, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad México, 35p.